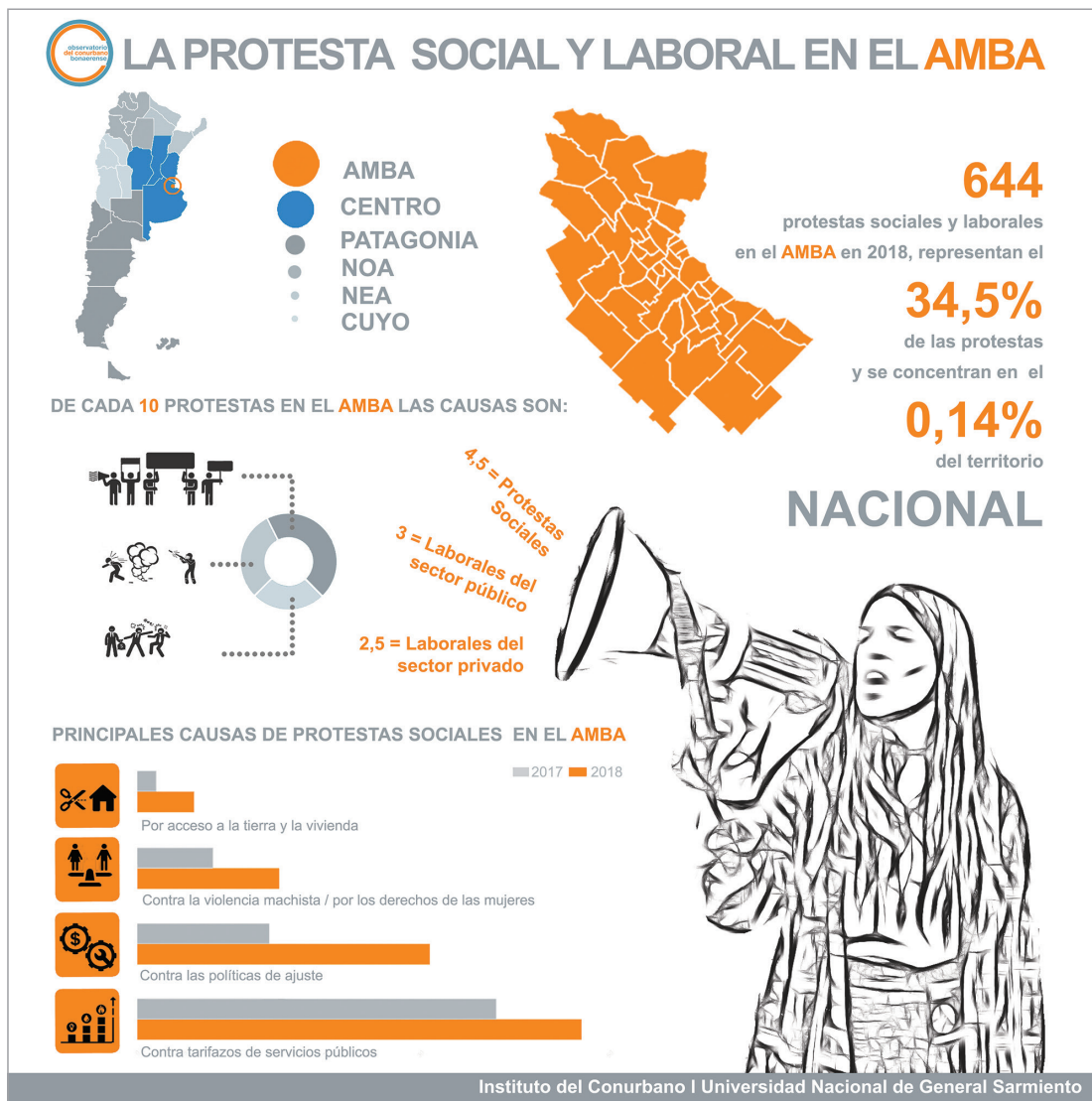


NEOLIBERALISMO Y AJUSTE. CONFLICTO SOCIO-LABORAL EN EL CONURBANO BONAERENSE

Por Leandro Gielis ¹ y Bárbara Couto ²



1 Observatorio de la Conflictividad socio-laboral de CEPA (Centro de Economía Política Argentina).

2 Observatorio del Conurbano, Instituto del Conurbano, UNGS.

El presente artículo presenta una caracterización del conflicto social y laboral en el Gran Buenos Aires ³ y se nutre de datos relevados y provistos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

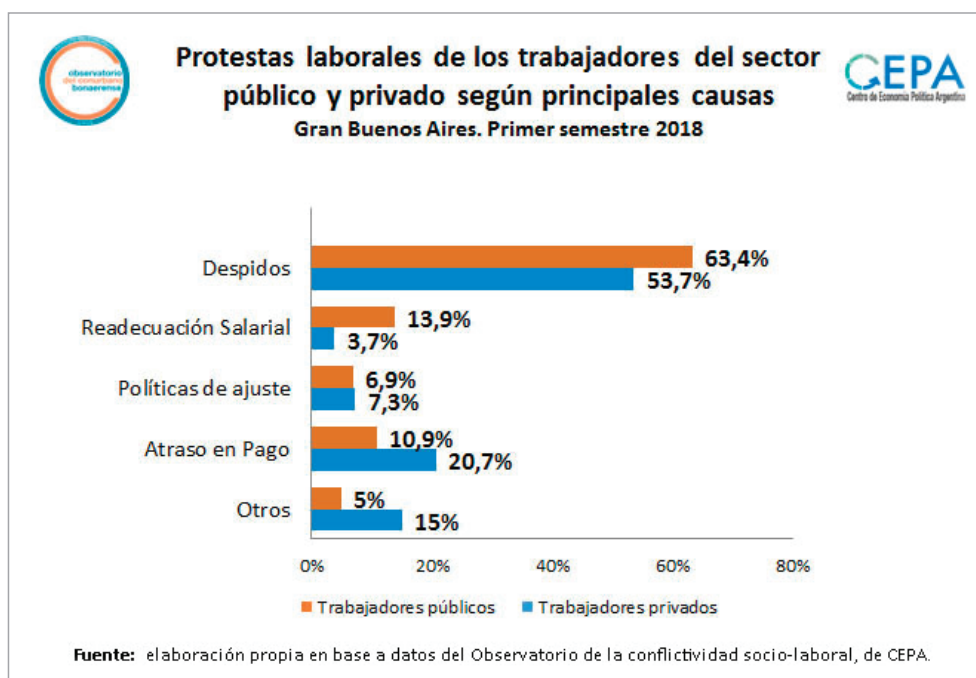
El Gran Buenos Aires es una región profundamente desigual que ha sido epicentro de expresiones múltiples de protesta social. En el primer semestre de 2018, tuvieron lugar 152 protestas sociales y 183 laborales, representando el 18% de los conflictos a nivel nacional.

Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de episodios acontecieron en cinco meses, entre marzo y julio, la región asistió en promedio a unas 16 protestas por semana. Si sumamos la Ciudad de Buenos Aires, debido a que es el destino priorizado por los manifestantes para expresarse frente a los organismos del gobierno nacional, las protestas de la región ascienden a 644, representando el 34.5% del total nacional y ascendiendo en promedio a 32 conflictos por semana.

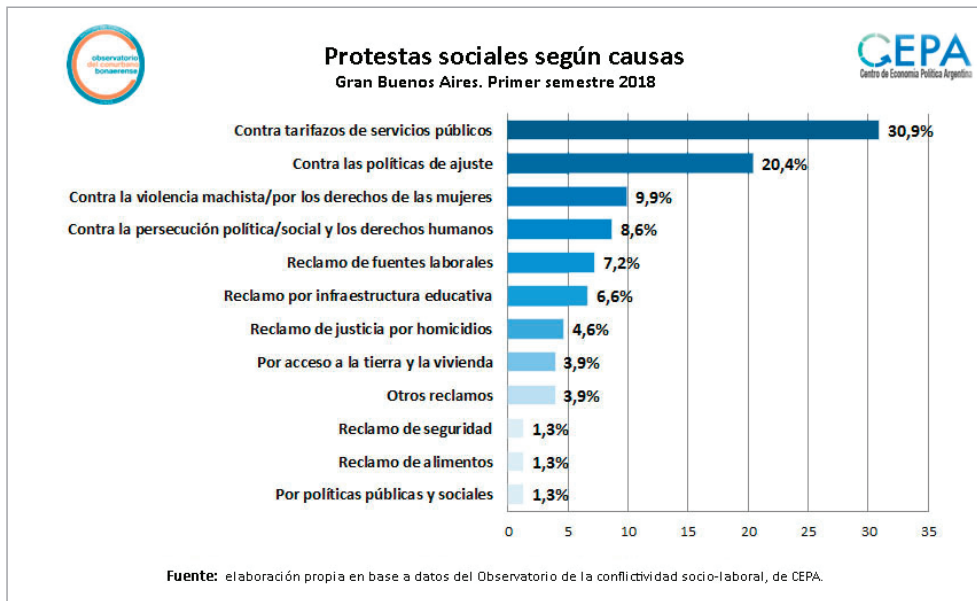
La agenda de la protesta fue bien diversa en 2018. Sus causas refieren a un conjunto de demandas que interpelan al gobierno nacional en relación a las diferentes funciones que desempeña el Estado. Los trabajadores del sector público lo interpelan como empleador y lideran con más de 100 protestas, que representan el 30% de todos los episodios (laborales y sociales), mientras que los conflictos de los trabajadores del sector privado representan el 24%. La centralidad de los conflictos liderados por el sector público obedece a diferentes factores. El mayor nivel de sindicalización dentro del Estado y el contexto de reestructuración de los ministerios llevan a que las principales consignas sean contra los despidos, la reducción

³ Se considera protesta o conflictos socio-laborales a aquellos eventos callejeros o que se producen al interior de ámbitos productivos o institucionales, que son llevados a cabo por organizaciones sindicales, políticas y/o sociales. La información sobre los conflictos es relevada diariamente por CEPA de las publicaciones en la web de los distintos medios de comunicación de alcance nacional, provincial y municipal. Asimismo, se relevan publicaciones de distintos sindicatos, agrupaciones sociales y políticas. El conflicto social y laboral se diferencian como universos para el análisis, no obstante, existe una interacción constante entre ellos. Conflicto laboral designa a aquellos episodios relativos al ámbito del mercado formal de trabajo, mientras que conflicto social alude al resto de las expresiones de protesta provenientes de ámbitos diversos de la vida social y política. La inclusión de La Plata y el área del Gran La Plata en la región del Gran Buenos Aires (24 partidos que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se debe a su relevancia como zona de localización de la protesta frente al gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

salarial y el atraso en los pagos. Por su parte, los conflictos en el sector privado fueron principalmente motorizados por los dos sectores de actividad con mayor incidencia de sindicalización: industria y transporte. Los despidos, el atraso de los pagos de salarios y las políticas de ajuste constituyeron las principales causas de los conflictos que protagonizan los trabajadores del sector privado y obedecen a la desestructuración del mercado interno de los últimos años. En efecto, la apertura indiscriminada de la economía, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el aumento astronómico de los servicios públicos viene impactando fuertemente sobre el nivel de actividad dañando la producción industrial y al comercio mayorista y minorista.



Por su parte, los conflictos sociales asumieron en 2018 un peso significativo respecto de los conflictos laborales a partir de la diversificación de reclamos que nutren la agenda de la protesta social. El activismo de las organizaciones sociales y políticas se orientó en torno a causas diversas. El 30,9% de las protestas sociales se volcó a reclamar por el "tarifazo", el 20,4% por las políticas de ajuste y el 10% reclamaron contra la violencia machista y por los derechos de las mujeres. Asimismo, las expresiones por las fuentes laborales y la infraestructura educativa concentraron el 7,2% y el 6,6% de las protestas respectivamente con 21 intervenciones en conjunto.



La orientación de la política del gobierno nacional constituía en 2017 el principal motivo del conflicto social y [en 2018 aumenta su incidencia](#). El 52.6% de las causas de las protestas social remiten a la política económica, social o a la [regulación de las tarifas de servicios públicos](#). En este período el cambio de los precios relativos (los salarios en relación a los precios de la canasta básica y la canasta de servicios públicos) deterioró de manera sustantiva el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto explica el aumento de los reclamos por “el tarifazo”, el cual supone una transferencia significativa de ingresos desde los sectores asalariados a las empresas de servicios públicos.

El acceso a los bienes y servicios esenciales constituye otro gran motivo de conflicto social. Las demandas por infraestructura educativa, seguridad y justicia por homicidios representan el 12.5% de los reclamos y redujeron su incidencia entre 2017 y 2018.

Por su parte, los reclamos por el acceso a las condiciones materiales esenciales (tierra, alimento, vivienda) crecieron en el mismo período, [representando el 5.2%](#) (cuadro Protestas sociales según causas). Entre estos reclamos, alimento y trabajo, consignas de los piquetes de fines de los años noventa, resurgen hoy como reclamos por la emergencia alimentaria y social en la región.

En relación a los [sujetos de la protesta](#), aparece la comunidad educativa y los estudiantes liderando, con un 28,3% de las expresiones de descontento social, en el marco del contexto de ajuste de partidas presupuestarias, subejecución y de fuerte conflictividad con los gremios por las negociaciones paritarias salariales. Le siguen las expresiones de “vecinos”, que no designan colectivos sociales definidos, pero que concentran el 25% de las intervenciones, canalizando reclamos diversos ligados a aumento de las tarifas de los servicios públicos y los hechos de inseguridad principalmente.

Las multisectoriales duplicaron su incidencia y lideran con el 15,8% la protesta social, presentando reclamos referidos al trabajo, los despidos, la rebaja de salarios y el deterioro progresivo de las condiciones de vida, en intervenciones articuladas entre sindicatos del sector público, privado -CGT y CTA-, partidos políticos y movimientos sociales (Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, entre otros).

La orientación neoliberal de las políticas de ajuste social y económico implementadas desde 2016, pone en tensión los diferentes roles que desempeña el Estado, como empleador en el sector público, mediador de relaciones laborales entre privados, como proveedor y regulador de bienes y servicios públicos esenciales, y como garante de derechos de diversos colectivos sociales, mujeres y organizaciones de derechos humanos.

En síntesis, las expresiones de conflictividad socio-laboral en la región del Gran Buenos Aires en el primer semestre de 2018 evidencian el creciente descontento popular en relación a la orientación de las políticas y a sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores, tanto del sector público y privado formal como de los trabajadores de la economía popular. Emerge una diversificación de las causas de la protesta (trabajo, educación, violencia de género, derechos humanos, etcétera) y una creciente convergencia del movimiento de protesta expresada en las intervenciones multisectoriales. Habrá que ver el alcance de dicho movimiento de protesta y su articulación política, de cara al escenario electoral de 2019.